



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

| | |
|-------------|------------------------------------|
| REFERENCIA: | ACCIÓN DE TUTELA – DECLARA NULIDAD |
| ACCIONANTE: | ROBERTO MANUEL RENGIFO ROMERO |
| ACCIONADOS: | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
| RADICADO: | 050013105 <u>008 2021 00199 01</u> |
| ACTA N°: | 40 |

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procedería a resolver la impugnación formulada por el accionante contra de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Octavo (8) Laboral del Circuito de Medellín, si no es porque se ha advertido una causal de nulidad en el trámite de la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 40** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado como sigue:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LA ACCIÓN DE TUTELA

El apoderado del señor ROBERTO MANUEL REGINO ROMERO interpuso la presente acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, debido proceso, y acceso a la administración de justicia, junto con el deber de cumplimiento de sentencias judiciales como parte del acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

Pretende con esta acción constitucional lo siguiente: i) Se ORDENE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que profiera acto administrativo en el que reconozca y pague la sentencia del 20 de octubre de 2014 proferida por el Consejo de Estado,

sobre la cual se presentó cuenta de cobro el 15 de julio de 2015, y en su lugar se asigne el turno a partir de dicha fecha y no la del 30 de diciembre de 2020 determinada a través del oficio 20211500007361 del 11 de febrero de 2021. ii) Se ORDENE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer como deuda pública la obligación contenida en la sentencia del 20 de octubre de 2014 y los intereses derivados de la misma que se encuentran en mora en los términos del Decreto 642 de 2020.

Para sustentar su pretensión afirmó, en síntesis: i) Que el 20 de octubre de 2014 el Consejo de Estado condenó a la accionada a indemnizar los perjuicios causados al actor, sentencia que quedó ejecutoriada el 13 de noviembre de 2014. La Entidad le informó al actor que la sentencia le había sido notificada y le indicó los requisitos para la asignación de turno de pago. El apoderado dirigió cuenta de cobro el **15 de julio de 2015**, dando cumplimiento a los requisitos exigidos en aquel entonces. ii) Ante el silencio de la entidad, el **16 de julio de 2020** se solicitó información sobre el turno asignado y se remitió comunicado convidando a la celebración de un acuerdo de pago bajo la normativa del Decreto 642 de 2020 por la cuenta de cobro remitida en el año 2015, y el **14 de octubre de 2020** se envió escrito requiriendo respuesta a la solicitud de acuerdo de pago. iii) Después de reiteradas solicitudes y de haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de presentación de la cuenta de cobro, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN respondió con oficio DAJ-10400 del 7 de octubre de 2020, radicado N° 202015000052811 notificado el **28 de diciembre de 2020**, pero solo para pronunciarse con respecto a la solicitud de interés en realizar acuerdo de pago, en la que indican: *"Revisada la carpeta contentiva del trámite administrativo de pago se constató que mediante comunicaciones con radicados N° 201500048961 del 22 de julio de 2017 y 20201500006961 del 10 de febrero de 2020, se le informó tanto a usted, como a la señora NORMA LILIANA CORRAL SALAS los requisitos que hacían falta para proceder asignar turno de pago, indicándoles que una vez se diera cumplimiento a lo solicitado esta Dirección procedería a asignar el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 962 de 2005"*. Señala que la accionada incurre en varias imprecisiones: a) No es cierto que haya enviado comunicación el 22 de julio de 2017. b) La señora NORMA LILIANA CORRAL SALAS es una persona desconocida porque el actor responde a otro nombre. c) Hasta el momento de presentación de la presente acción de tutela, no se ha ofrecido una respuesta frente a la solicitud de cuenta de cobro radicada el 15 de julio de 2015, desbordando de manera exagerada el término de diez meses para el pago de sentencias, estipulado en el artículo 192 del CPACA. iv) En lo que respecta a la

comunicación del 10 de febrero de 2020 notificada el **14 de febrero de 2020**, la entidad manifiesta lo siguiente: "ante lo cual mediante oficio con radicado N° 20151500002231 del 19 de enero de 2015, se le informó al doctor FERNANDO ALVAREZ ECHEVERRI, quien fungió como apoderado dentro del proceso, la falta de los requisitos consagrados en el Decreto 768 de 1993 modificado por el Decreto 818 de 1994, para asignarle turno de pago." En otro aparte del documento dice: "Mediante oficio con radicado N° 20156110872002 del 15 de julio de 2015, doctor FERNANDEZ ALVAREZ ECHEVERRI, allegó algunos requisitos quedando pendiente para la asignación de turno de pago, allegar copia del poder otorgado, la nota de presentación personal de la solicitud de pago, los datos de identificación teléfono y dirección de correo electrónico de los beneficiarios y su poder, según las exigencias del Decreto 768 de 1993 modificado por el Decreto 818 de 1994, vigentes para esa fecha y que al día de hoy no se ha dado cumplimiento". Así, expresa que de la comunicación relacionada se desprende: a) No va dirigida al apoderado del accionante, abogado FERNANDO ALVAREZ ECHEVERRI, motivo por el cual se hace difícil identificar máxime si la comunicación está encaminada a persona distinta, NORMA LILIANA CORRAL SALAS. b) En el oficio N° 20151500002231 del 19 de enero del 2015, en ningún aparte dice que faltan requisitos para asignar turno de pago, teniendo en cuenta que para el 19 de enero de 2015, el apoderado aún no había presentado la cuenta de cobro. c) Con el escrito denominado cumplimiento de sentencia dirigido a la Fiscalía el 15 de julio de 2015, se confirma que dicha solicitud se presentó cumpliendo con los requisitos exigidos vigentes para la época y si la entidad consideraba lo contrario debió hacerlo saber dentro de un término razonable y no 5 años después. d) Pese a existir cuenta de cobro de la sentencia desde el 15 de julio de 2015, el 30 de diciembre de 2020 el apoderado dio cumplimiento a los requerimientos del Oficio el 7 de octubre de 2020 allegando una serie de documentos para que le asignen turno de pago. e) En atención a los documentos enviados el 30 de diciembre de 2020, la entidad contestó bajo radicado 20211500007361 que data del 11 de febrero de 2021 y fue notificada el 17 de febrero de la misma anualidad, y asignó el turno de pago en el listado de sentencias con fecha del 30 de diciembre de 2020, con lo que somete al actor a una carga adicional, más aún **cuando no se notificó a tiempo la falta de requisitos para la asignación del turno de pago**, lo que no se a lo dispuesto en el artículo 192 CPACA. v) Agrega además que lo que la entidad lo que pretende es desconocer los intereses generados por la cuenta de cobro presentada desde el 15 de julio de 2015, insistiendo en que la entidad **no cumplió con el deber de notificar al apoderado del actor**, pues no se envió el Oficio Rad. 202015000052811 a la dirección electrónica señalada, dilatando la efectividad de la sentencia favorable. vi) Finalmente, indica que el actor tiene 63 años de edad, es padre de un menor en situación de discapacidad, se

dedica a las labores del campo por lo que tiene pocos ingresos, lo que se ha agravado con la situación del COVID-19, y ha sido diagnosticado con enfermedades de alto costo como lo son: diabetes mellitus, hipertensión y gastritis. Así el único ingreso con el que cuenta sería el correspondiente al pago de la indemnización ordenada en la sentencia, por lo que solicita se conceda el amparo por la espera a la que se ha sometido al actor.

1.2. LA ENTIDAD VINCULADA AL PROCESO Y SU INTERVENCION

Mediante auto del 13 de mayo de 2021 se avocó conocimiento, teniendo como accionada a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS – SECCIONAL PAGOS SENTENCIA ACUERDO CONCILIATORIOS, y en esos términos se efectuó la notificación.

En efecto, contestó la Coordinadora de la Sección de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la fiscalía General de la Nación, solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional y en consecuencia, se despachen desfavorablemente todas las pretensiones, señalando que se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y jurisprudenciales que en materia de pago de sentencia y conciliaciones existen por parte de las Entidades Públicas. Desarrolló sus planteamientos en el siguiente orden: **i)** En primer lugar, sobre el caso concreto del trámite de pago y asignación de turno de pago de sentencia; **ii)** En segundo término, explica el trámite administrativo al interior de la entidad, para afirmar la inexistencia del derecho fundamental al debido proceso del accionante y la inexistencia de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, invocando las sentencias SU 238 de 2019 y SU 565 de 2019 de la Corte Constitucional. **iii)** Alega la improcedencia de la acción por falta de acreditación de defecto material o sustantivo y que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez.

1.3. LA CAUSAL DE NULIDAD

El inciso segundo del **artículo 13 del Decreto 2591 de 1991** al regular lo atinente a las personas que intervienen en el proceso dispone:

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud."

La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que aún a pesar de la informalidad inherente a este tipo de proceso constitucional en el que se busca privilegiar la celeridad en virtud de la necesidad de eficacia en la protección de los derechos fundamentales; en todo caso, su ejercicio se encuentra claramente cobijado por el principio constitucional del debido proceso, de manera que en su trámite se debe dar aplicación a todas las disposiciones constitucionales y legales con que cuenta el ordenamiento jurídico, no sólo para la adecuada realización de los derechos que la parte activa busca le sean protegidos, sino los de la parte accionada y los de quienes resulten afectados con las determinaciones que se adopten en su curso.

Se concluye entonces que, si se presentan actuaciones procesales que conlleven a la vulneración de los derechos fundamentales de debido proceso y de defensa, deben adoptarse las medidas dirigidas a su saneamiento para restablecer el equilibrio procesal y el derecho que ha sido de este modo conculcado.

Consecuente con lo anterior, y atendiendo a los hechos y pretensiones del escrito de tutela, la sentencia y la impugnación, es claro que en el presente proceso constitucional resulta imperioso declarar la nulidad a partir del auto del **13 de mayo de 2021**, con el fin de que se avoque conocimiento en contra del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, y se efectúe la notificación correspondiente, por las siguientes razones: **i)** En primer lugar, porque de acuerdo con lo previsto en el **artículo 133 del Código de General del Proceso, numeral 8**, en concordancia con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. **ii)** De conformidad con lo previsto en el **artículo 71 del Decreto 111 de 1996**¹, el

¹ Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.

reconocimiento de los créditos judiciales a cargo de las entidades públicas, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, se realiza en la medida en que se efectúe la asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al rubro de sentencias y conciliaciones judiciales. En virtud de lo anterior, es claro que la ejecución de pago que constituye el objeto de este proceso constitucional, comprende un acto administrativo complejo y un trámite de responsabilidad compartida con esta cartera ministerial.

De otro lado, la Sala observa lo siguiente: i) En la tutela se afirma que desde la presentación de la cuenta de cobro con fecha de recibido **15 de julio de 2015** bajo el número de **Radicación 2015 6110872002**, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN **“no se ha pronunciado al respecto ni dio contestación a dicha solicitud”**. ii) La Coordinadora de la Sección de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la fiscalía General de la Nación afirma en su intervención que si bien el apoderado presentó solicitud de pago el **15 de julio de 2015**, al verificar que no cumplió con los requisitos establecidos por el artículo 3 del Decreto 768 del 23 de abril de 1993, modificado por el Decreto 818 de 22 de 1994 (sic)", remitió **comunicación 2015 15000048961 del 22 de julio de 2015** a la dirección del apoderado de los beneficiarios del fallo, indicándole cuales eran los requisitos faltantes y que una vez se diera cumplimiento, se procedería a asignar turno de pago. Afirma que la comunicación fue remitida a la dirección de correo del apoderado en la ciudad de Medellín y no fue devuelta, anexando copia de la planilla de correspondencia. **iii)** Revisada la foliatura, se advierte que se allegó por la accionada la Guía No. RN

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38/89, artículo 86, Ley 179/94, artículo 49).

403123662CO correspondiente a la planilla 714 del 23 de julio de 2015. Pero no reposa en el plenario la **comunicación 2015 15000048961 del 22 de julio de 2015** a que hace referencia la entidad en su intervención, ni respuesta alguna con la que se hubiese informado al actor o a su apoderado sobre el cumplimiento de los requisitos en relación con la cuenta de cobro radicada bajo el número **20156110872002** del **15 de julio de 2015**,

Por esta razón, al avocar conocimiento, y en uso de los deberes y facultades derivadas de los **artículos 19 a 22 del Decreto 2591 de 1991**, la Juez de instancia requerirá la información correspondiente en aras de verificar las circunstancias que giran en torno a lo que es objeto de protección en este proceso constitucional; y las demás pruebas que considere necesarias para **resolver de fondo** sobre la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor ROBERTO MANUEL REGINO ROMERO.

2. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la Ley, **RESUELVE:**

Decretar la **NULIDAD** de todo lo actuado en la presente acción de tutela a partir del auto del **13 de mayo de 2021**, con el fin de que se vincule al proceso al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** y se efectúe la notificación correspondiente.

Y en el mismo auto y en uso de los deberes y facultades derivadas de los **artículos 19 a 22 del Decreto 2591 de 1991**, se requerirá a las entidades y concretamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ya vinculada al proceso, - Coordinadora de la Sección de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios de la Dirección de Asuntos Jurídicos - para que remita la comunicación o comunicaciones a que hace referencia en su intervención (**2015 15000048961 del 22 de julio de 2015**) por medio de la cual indicó al actor o a su apoderado los requisitos faltantes a la cuenta de cobro radicada el **15 de julio de 2015** bajo el número **20156110872002**, conforme lo analizado en la parte motiva de esta providencia; y sobre las demás pruebas que la A quo considere necesarias para **resolver de fondo** sobre la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor ROBERTO MANUEL REGINO ROMERO.

RADICADO 050013105 008 2021 00199 01

NOTIFÍQUESE ésta decisión a las partes, por cualquier otro medio eficaz (Decreto 2591/91 Art. 16; Decreto 306/92 Art. 5).

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 117 del 07 de julio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>